

LA LÍNEA DEL PASADO CERCAÑO

UN HILO RECORRE LA HISTORIA, fino en ocasiones, grueso en otras. «Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces», escribió Pablo Neruda. El narrador intenta que se le escuche, manifiesta su deseo de expresar con sencillez un viejo discurso que parece encasillado por medios que le acorralan. Tiene su complicación. Adelgazar la letra, fortalecer la imagen. Hacer el mensaje más breve. Euskadi Ta Askatasuna, ETA, surgida en 1958 del compromiso intelectual de una generación de jóvenes, alcanzaba a atisbar la caducidad de sus métodos de confrontación política, la lucha armada. Para ello hay que hacer un camino. Del caserío Txillarre de Elgoibar, las palabras saltaron en 2006 a Suiza y luego a Noruega. Una parada y, de nuevo, el retorno en 2010.

El caserío Txillarre, en las cercanías de Elgoibar, se convertiría en un icono para encontrar puntos de encuentro hacia la paz. Arnaldo Otegi (izquierda abertzale) y Jesús Eguiguren (PSOE) fueron los actores principales de un escenario que se prolongó en las llamadas Conversaciones de Loiola entre delegaciones del PSE-EE, PNV y Batasuna para buscar una solución política al conflicto. Las reuniones, que fueron doce y se realizaron en el Centro Arrupe de la Compañía de Jesús de Loiola, tuvieron como promotor consensuado a Eusko Ikaskuntza. Su punto de partida, la propuesta de Batasuna de Anoeta (noviembre de 2004), que cambiaba el concepto del protagonismo en la estrategia negociadora a través de dos mesas: una política entre los partidos, y otra técnica sobre las consecuencias del conflicto entre el Gobierno español y ETA.

Las Conversaciones de Loiola serán el resultado del proceso aceptado por el gobierno de Rodríguez Zapatero para la apertura de diálogo con ETA, un diálogo autorizado mediante resolución institucional en mayo de 2005 por el Parlamento español y ratificado, con algunos cambios, por el Parlamento europeo, con la oposición del PP y del Grupo Popular Europeo. Después de cometer el último atentado mortal en mayo de 2003 y anunciar el fin de los ataques contra representantes políticos en junio de 2005, ETA declaró una tregua unilateral desde marzo de 2006 hasta junio de 2007.

Paralelamente a las Conversaciones de Loiola, celebradas de setiembre a noviembre de 2006, se desarrollaron encuentros entre representantes de ETA y del Gobierno español en Ginebra y Oslo bajo el auspicio del Gobierno noruego y del Centro Henri Dunant (HDC) suizo. A finales de octubre de aquel año se intentaba el acuerdo, pero en las semanas siguientes las desavenencias resurgieron. ETA condicionó la continuidad, el 30 de diciembre de 2006, con un atentado mortal en el aeropuerto de Madrid que rompía la tregua de facto, por primera vez sin aviso. Aún en los meses siguientes, los interlocutores se sentarían en torno a la mesa bajo la mirada de los mediadores internacionales, que solo pudieron atestiguar el final de aquel intento. Será la última tentativa de solución del conflicto a través de la negociación. Sin embargo, el hilo se tensó pero no se rompió.

Teresa Whitfield tiene un especial conocimiento de conflictos del área hispana con los que ha convivido a través de informes internos a las organizaciones para las que ha trabajado. Vive entre Ginebra, al borde del lago Lemán que armoniza aguas entre Francia y Suiza, y Nueva York, en la Gran Manzana, nodo económico y cultural mundial. Ha sido durante un tiempo adjunta al director del International Crisis Group (ICG), una organización no gubernamental, fundada en 1995, dirigida a la resolución y prevención de conflictos armados. Accedió al cargo que ha ostentado durante un periodo no demasiado prolongado en enero de 2015, después de concluir su estudio sobre el conflicto vasco, que publicó en forma de libro unos meses antes en una editorial de Londres: «Endgame for ETA» (Fin de juego para ETA). Con un currículo repleto de actuaciones en instituciones relacionadas con la búsqueda de la paz, tomó la decisión de abordar el libro cuando hacía labor de puente entre el Centre for Humanitarian Dialogue (CHD), más conocido como Henri Dunant Centre, y Naciones Unidas.

Henri Dunant Centre, con sede en Ginebra y dedicado a la mediación en conflictos armados, ya en 2005 había sido la organización consensuada entre ETA y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para abordar su proceso de diálogo. Recibió el visto bueno de ambos interlocutores. Zapatero solía comentar que su compañero de partido Javier Solana, entonces Alto Comisionado de la Unión Europea para cuestiones de seguridad, después de ser secretario general de la OTAN, fue quien le sugirió el centro. Desde entonces, y debido a las filtraciones habituales del Ministerio del Interior y los servicios secretos españoles a la prensa, el centro Henri Dunant ha estado en el punto de mira de los analistas que se animaban a relatar los contactos entre ETA y el Gobierno.

Aunque Whitfield había publicado el libro, no era ni una escritora ni una periodista al uso. Aprovechó sus conocimientos y su facilidad para escribir informes y se lanzó a la aventura literaria. En 2010, unos años antes de la edición del libro sobre ETA, había confeccionado un manual para facilitadores por encargo del United States Institute of Peace (USIP), en el que hacía un repaso de los grupos de contacto e intermediarios que trabajaban entonces en diversos escenarios del mundo en la resolución de conflictos armados. Whitfield identificaba las tareas principales que debían realizar los facilitadores en su labor de intermediación, una suerte de técnica para abordar la paz.

Con ese bagaje, cuando Whitfield registró en su «Endgame for ETA» la lista de los facilitadores que hasta 2014 habían trabajado con discreción en la cuestión vasca, su credibilidad estaba justificada. Tenía conocimiento de causa. Y decía que en la última década, con mayor o menor intensidad, eran varias las organizaciones especializadas en conflictos que se habían dedicado a la tarea de intermediación entre ETA y los gobiernos español y francés, entre ellas, como más destacadas, Centre for Humanitarian Dialogue (HDC), Berghof Foundation y Conciliation Resources (CR).

A estas alturas ya es conocido que la aportación y el compromiso del Gobierno noruego fueron claves en el desarrollo de los acontecimientos. Tres representantes de ETA estuvieron acogidos en Noruega durante más de quince meses a la espera de una delegación española que nunca llegó. El Gobierno noruego había hecho más que cualquier otro gobierno europeo hasta entonces para facilitar la intermediación.

Hubo nombres propios. Johan Vibe era un enjuto funcionario, de escaso pelo y con un aire a Art Garfunkel, que había ingresado en el

Servicio Exterior del Reino de Noruega con tan solo 26 años. Su carrera diplomática parecía predestinada a gestionar espacios opacos relacionados con conflictos. Entre 2005 y 2009 fue director general adjunto para el Departamento de Paz y Reconciliación del Ministerio de Asuntos Exteriores, desde donde colaboró para buscar una solución al conflicto vasco. Los representantes vascos que le trataron lo recuerdan por su expresión más habitual: «Sí, sí; claro, claro».

Posteriormente, el Ejecutivo del rey noruego Herald v puso de embajador en Madrid a este hombre de confianza. Llegó a Madrid desde la embajada de Noruega en Washington, donde no tenía un puesto específico asignado pero en la que residió durante tres años. Desde 2012 hasta 2016 ocupó el cargo en la capital de España y entonces fue trasladado a Colombia, donde por fin pudo ejercer la labor encomendada, la intervención discreta del Gobierno de Noruega en la intermediación entre el equipo de Juan Manuel Santos y las FARC. Justo lo que no pudo hacer en Madrid con el conflicto vasco.

A estos grupos de intermediarios y al Gobierno de Noruega habría que añadir otra asociación que no fue recogida en el texto de Whitfield pero que también tuvo su relevancia, en especial cuando llegó la hora de crear una comisión que verificara el fin de la violencia de ETA. Se llamaba Dialogue Advisory Group (DAG) y tenía su sede central en Ámsterdam. Hoy, en su página web, señala que han participado en los procesos de desarme del IRA, de ETA y de diversos grupos de Congo. Su presidente era Nicholas Stewart y tenía varios asesores de peso; uno de ellos Lakhdar Brahimi, antiguo ministro de Exteriores de Argelia; el otro, Wegger Strommen, embajador de Noruega en Washington. Tres de sus asesores formarían parte de la civ que monitorizaría el alto el fuego de ETA; dos de forma oficial, Ram Manikkalingam y Fleur Ravensbirgen, y uno de forma oficiosa, Juan Garrigues.

Los facilitadores internacionales habían aconsejado a la entonces ilegalizada izquierda abertzale una serie de medidas para superar el bloqueo y, de paso, avanzar en el proceso abierto en Loiola y estancado después de la última reunión entre ETA y el Gobierno español a finales de mayo de 2007. En algún informe inicial llegaron incluso a llamarlo «Loiola 2». Un modelo a seguir, importante por el efecto que tuvo, llegó de Sudáfrica de la mano de Brian Currin, al que los medios españoles convirtieron pronto en protagonista. Currin se había involucrado en la

consecución de la paz en Euskal Herria desde 2003. Tuvo una participación destacada en el proceso irlandés y en Sudáfrica, de donde era originario; había sido nombrado por el presidente Nelson Mandela para formar parte de la Comisión de la Verdad que investigó los crímenes del apartheid.

Currin introdujo elementos novedosos para la superación del bloqueo que sufría la izquierda abertzale, ilegalizada y criminalizada. Y los aportó desde la experiencia del sudafricano UDF (Frente Democrático Unido). La situación de clandestinidad del ANC (Congreso Nacional Sudafricano) de 1960 a 1990 provocó el nacimiento de una plataforma legal, el UDF, que aglutinó a centenares de colectivos, asociaciones y grupos. El UDF pudo hacer política, mostrar la potencialidad de la misma y avanzar en ese lema permanente de los grupos de izquierda, el de la acumulación de fuerzas para, en la línea gramsciana, revolcar las hegemonías. El UDF también fue ilegalizado, y de sus cenizas surgió el Movimiento Democrático de Masas (MDM) en la época en que, al norte del continente africano, ETA negociaba con el Gobierno español, entonces liderado por Felipe González. En Argel, en 1989. Un año más tarde, Mandela salía de prisión.

La izquierda abertzale había intentado promover iniciativas similares desde la ilegalización de Herri Batasuna. Pero el cerco judicial se fue imponiendo poco a poco, y todo el espectro abertzale fue ilegalizado, siguiendo una máxima contrainsurgente de la década de 1980, «ahogar al bebé en su propia leche», lo que significaba convertir una lucha política en otra únicamente de posiciones. Se cerraron medios de comunicación y se ilegalizaron partidos, asociaciones, entidades juveniles, grupos de solidaridad, agrupaciones electorales... Por vez primera en muchas décadas, un porcentaje notorio de presos políticos vascos, e incluso de exiliados, no estaba relacionado con ETA.

La narrativa de Currin y su impulso mediático tuvo un importante impacto en la sociedad vasca. Entrevistas, conferencias, seguimiento y cobertura en las redes sociales. Los movimientos de Currin lograron que los pasos discretos que se estaban realizando en los lugares habituales, en especial en Ginebra, tuvieran visibilidad. Aparentemente rondaba el *nihil novum sub sole*, el bíblico «nada nuevo bajo el sol». La realidad, sin embargo, auguraba cambios de fondo. La izquierda abertzale se preparaba para un cambio de fase. Un cambio revolucionario

porque por vez primera abordaría el proceso de paz y soberanista desde la unilateralidad, rompiendo el clásico formato de negociación de la era postcolonial. Aunque aún faltarían decenas de reuniones y contactos con diversos actores.

La primera piedra pública para este nuevo escenario se presentó, en noviembre de 2009, simultáneamente en Altsasu, lugar simbólico donde en 1977 la izquierda abertzale había dado a luz a Herri Batasuna, y Venecia, la ciudad europea construida sobre el mar a la que acudió un número importante de corresponsales europeos. La mesa vasca estaba compuesta por 110 militantes históricos y la de Italia por representantes de la izquierda abertzale, por la presidenta del DTP kurdo, Emine Ayna, y el responsable de exteriores del Sinn Féin Raymond McCartney, además de vídeos de Gerry Adams, Murat Karayilan, presidente del PKK, y Arnaldo Otegi, recientemente encarcelado precisamente por auspiciar ese cambio hacia una estrategia exclusivamente política. El cierre de la conferencia de Venecia fue a cargo de Brian Currin. La lista de invitados era la de aliados clásicos de la izquierda abertzale de las últimas décadas, irlandeses y kurdos. Unos en proceso de paz, los otros en conflicto armado abierto. En Altsasu, la declaración apostaba por un proceso democrático siguiendo la senda de los desarrollados en Irlanda o Sudáfrica. Y también la disposición a asumir, en un proceso de diálogo, los principios del senador norteamericano George Mitchell. Ese plan había favorecido el acuerdo anglo-irlandés para Irlanda del Norte. Esos principios comprometían a las partes a usar medios democráticos y exclusivamente pacíficos para resolver cuestiones políticas y explicitaban la renuncia a usar la fuerza para influir en el proceso. En la línea marcada en el documento de debate interno de Batasuna, los comparecientes remarcaron ser «un movimiento político al que el tiempo ha dado la razón», pero lamentaron que la violencia y el enfrentamiento armado se hubieran prolongado «mucho más allá de lo que nadie debiera desear», por lo que calificaban su superación como algo prioritario. Se trataba de «hacer irreversible el cambio político» a través de una herramienta: el proceso democrático. La izquierda abertzale subrayó así, por vez primera, que su decisión era unilateral. Expresada su voluntad, fijaba también una serie de principios que asumía y que trasladaba a la comunidad vasca e internacional. Destacaba el primero, que afirmaba que «la voluntad popular expresada por vías pacíficas y democráticas se constituye en la única referencia del proceso

democrático de solución, tanto para confiar en su puesta en marcha y su óptimo desarrollo como para alcanzar los acuerdos que deberá refrendar la propia ciudadanía. La izquierda abertzale, como debieran hacer el resto de agentes, se compromete solemnemente a respetar en cada fase del proceso las decisiones que, libre, pacífica y democráticamente, vayan adoptando los ciudadanos y ciudadanas vascas».

En su debate interno y a través de varios borradores y caracterizaciones del proceso negociador, la izquierda abertzale aventuraba las posibilidades de su apuesta. Entre ellas, intuía un bloqueo, aunque no de la magnitud del que llegaría. A principios de octubre de 2011, la izquierda abertzale, ilegalizada, distribuía un guión de apenas cuatro folios para clarificar la postura entre su militancia. No tenía título, simplemente se hacía eco del cambio de estrategia. En su apartado relativo a la negociación, citaba los dos escenarios que podrían abrirse:

«Con acuerdo democrático integrador –enunciaba primero–. Caso de que el Estado se avenga a adoptar reformas estructurales territoriales, asumiendo la realidad plurinacional y respetando las voluntades nacionales, derivadas del diálogo y la negociación multilateral».

«Sin acuerdo democrático –agregaba como segunda hipótesis–. Proceso de diálogo y negociación abiertos, pero bloqueados los aspectos de acuerdo resolutivos por parte del Estado. Proceso, por tanto, a desarrollar unilateralmente, ganando mayorías sociales y políticas, en la activación de una Nueva Democracia, reivindicativa de un nuevo marco jurídico-político en Euskal Herria».

El hecho de contemplar ya entonces la hipótesis de tener que avanzar sin acuerdo muestra una importante capacidad de análisis, aunque asumir en la práctica esa perspectiva en su profundidad, como se hará al final para lograr desatascar el desarme, llevará aún mucho tiempo y trabajo.